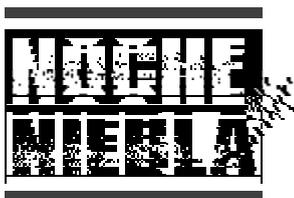


CASO TIPO No. 1B



Por la Vida

E - mail: nocheyniebla@unete.com
Sitio web: <http://www.nocheyniebla.org>
Foto Carátula: Jesús Abad
Fotos páginas interiores: Jesús Abad

Tarifa Postal Reducida Adpostal No. 104 vence Dic. 2005

Bogotá, febrero de 2004

ISSN: 0123-3637



Dirección de Cultura



Por la Vida

Adpostal



Llegamos a todo el mundo!

CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA Y AL MUNDO

ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS

VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO
SERVICIO DE CORREO NORMAL
CORREO INTERNACIONAL
CORREO CERTIFICADO
RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS
FILATELIA
CORRA
FAX

LE ATENDEMOS EN LOS TELEFONOS
2438851 - 3410304 - 3415534
9800 15503
FAX 2833345

Contenido

	Página
Presentación	4
Introducción	5
Capítulo I: Promesas no cumplidas	7
Capítulo II: La verdad y la justicia bajo un manto de impunidad	22
Capítulo III: La "seguridad democrática" en la región	32
Capítulo IV: Las dos caras de la comunidad internacional	42
Epílogo: "Por un buen trato en el río atrato"	48
Anexo 1: El modelo de violencia estructural sigue intacta en el chocó	54
Anexo 2: Cronología de hechos de violencia después del 2 de mayo de 2002 hasta la fecha	60

Presentación

Los luctuosos hechos del 2 de mayo de 2002, acontecidos en el templo parroquial de Bojayá, conmovieron a la sociedad chocoana, a la colombiana y a la comunidad internacional. Pasado este tiempo de llanto, los gritos de horror resuenan en nuestros oídos y claman al cielo pidiendo justicia.

Como en tiempo de Moisés, “Dios escucha el clamor de su Pueblo”, y acompaña su caminar, de día calmando las inclemencias del entorno, de noche iluminando sus conciencias para que puedan llegar a una tierra “que mana leche y miel”. Esa esperanza sostiene a los familiares de las víctimas que fallecieron, así como a quienes permanecen desplazados en Quibdó y otras latitudes.

En homenaje a los niños, a las mujeres y a los hombres que allí ofrendaron su vida, se entrega este texto que intenta conservar la memoria, exigir la aplicación de la justicia y la reparación de los daños materiales y morales.

Dios quiera que los encargados de cumplir con las demandas de estas comunidades asuman su responsabilidad, para que sus justos anhelos encuentren la respuesta debida.

Una vez más la Diócesis de Quibdó reafirma su compromiso solidario con las comunidades Negras, Indígenas y Mestizas que habitan esta rica selva del Atrato, y pide la bendición de Dios Padre y Madre para que su Espíritu continúe fortaleciendo el ánimo de quienes aportan su vida a la instauración del Reino de Paz y Justicia anunciado por Jesús de Nazareth.

+ Fidel León Cadavid Marín
Obispo de Quibdó

Introducción

El 2 de mayo de 2002, Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, en el departamento del Chocó, fue escenario de cruentos combates entre la guerrilla de las FARC-EP y los paramilitares. Las FARC lanzaron un cilindro bomba contra los paramilitares que se encontraban atrincherados alrededor del templo católico del lugar, escudados con la población que se hallaba refugiada allí desde el día anterior. El cilindro hizo impacto en medio del altar del templo, dejando un escalofriante resultado: 119 muertos civiles¹, entre ellos 45 niños, y más de 95 personas heridas.

A raíz de estos hechos y ante la zozobra de nuevos combates, más de 4000 personas de los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte se desplazaron hasta Quibdó. Allí no encontraron el apoyo prometido por las instituciones estatales, por lo que algunos se vieron obligados a realizar retornos sin ningún tipo de condiciones ni garantías de seguridad y subsistencia. El 1 de septiembre y el 17 de noviembre de 2002 alrededor de 2000 personas retornaron a Bojayá con la esperanza de que allí se cumplieran las promesas de reconstrucción y reparación.

La diócesis de Quibdó y el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, se propusieron analizar la situación de la población y de las comunidades de la región durante más de año y medio que han transcurrido desde la tragedia de Bojayá, con el fin de identificar el grado de cumplimiento de las promesas y compromisos adquiridos por el Estado frente a la reconstrucción y reparación integral de la población afectada. Para ello se consultó a las comunidades, organizaciones sociales y líderes, así como los informes de organismos internacionales y de organismos estatales, tanto del área ejecutiva como de la de control.

El balance recogido en este documento nos permite señalar que:

- Los gobiernos de los Presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe han incumplido sustancialmente las promesas, compromisos y acuerdos establecidos con las víctimas, familiares de las víctimas, comunidades y organizaciones sociales de la región. Compromisos y acuerdos que se hicieron de cara al país y a la comunidad internacional.
- Estos gobiernos han priorizado la presencia militar en el territorio antes que la presencia civil y social, dando mayor importancia a la confrontación con actores insurgentes que a la situación de emergencia social, económica, psíquica y moral de las víctimas, que demanda urgentemente la reconstrucción integral de las comunidades y poblaciones afectadas.
- El Gobierno y las instituciones del Estado, responsables de las acciones operativas de reconstrucción, han pretendido responsabilizar, en varias ocasiones, a las comunidades y

¹ La cifra real de muertos sigue siendo incierta, ya que según familiares y personas de la comunidad de Bellavista-Bojayá el número real de muertos en el templo fue de 86.

organizaciones sociales de la región, de una supuesta falta de voluntad para tomar decisiones que les incumben en la reconstrucción.

· Los responsables de los hechos criminales perpetrados el 2 de mayo de 2002 y de los que se han continuado perpetrando hasta la fecha en la zona, como puede observarse en el anexo de este documento, permanecen en absoluta impunidad.

- El control militar y paramilitar bajo el cual se encuentra hoy la región ha generado múltiples violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y antes que garantizar la tranquilidad de los pobladores ha generado mayor zozobra, riesgos y vulneración de derechos y libertades fundamentales.

- El llamado proceso de “negociación” con los grupos paramilitares, incluyendo el proyecto de ley que mira a indultar *de facto* sus crímenes, tiene consecuencias de gran trascendencia para la región. Sin negar la presencia simultánea en la zona de actores insurgentes, los paramilitares constituyen sin embargo el actor que mayor violencia ha ejercido contra las comunidades del Medio y Bajo Atrato. En el último período se ha desarrollado una estrategia de ocupación del territorio de estas comunidades por parte de los paramilitares, en el marco de la política de “reinserción” de los miembros de dichos grupos. Esta situación, además de no haber sido consultada con las comunidades, genera tensiones, riesgos y nuevas oleadas de desplazamiento forzado.

- Los megaproyectos de “desarrollo” y las estrategias concomitantes de saqueo de los recursos naturales que afectan negativamente la rica biodiversidad de la zona, avanzan sin control alguno por parte del Gobierno y del Estado.

- La presencia y la acción de la Comunidad Internacional fue coyuntural, descoordinada y centrada en la emergencia humanitaria, dejando de lado un enfoque integral de la reparación y de la protección de los derechos humanos, así como la exigencia al Estado de un cumplimiento eficaz de los acuerdos realizados con las comunidades, en presencia de organismos internacionales.

La región presenta hoy una situación de alto riesgo de nuevas tragedias, riesgo que se cierne sobre una realidad humana y social mucho más deteriorada que aquella que sufrió la tragedia del 2 de mayo de 2002, dado que no ha habido reconstrucción ni reparación ni prevención. El Gobierno y el Estado son responsables, no sólo por no haber tomado las medidas para prevenir los hechos de 2002, como lo señaló en su momento el Informe de la Oficina de las Naciones Unidas, sino también por las promesas no cumplidas y por el engaño al que ha sometido a las víctimas, familiares y comunidades; por la impunidad en la que mantiene los hechos; por la cantidad de nuevas y flagrantes violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario que durante este más de año y medio se han cometido contra los pobladores de la región; por la tolerancia del paramilitarismo que va copando y sometiendo la zona, cuya confrontación con la insurgencia se hace siempre de manera brutal y tomando como escudo y escarnio a la población civil que por necesidad habita en las zonas visitadas por los insurgentes.